

EL TRIBUNAL DEL CONSULADO DE VALENCIA EN EL SIGLO XVIII: CONFLICTOS DE COMPETENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE EN LOS PROCESOS

ADELA MORA CAÑADA

Profesora titular de Historia del Derecho
Facultad de Derecho
Universitat de València

En una primera aproximación al estudio del tribunal consular valenciano en el siglo XVIII¹ exponía cómo fue restaurada esta institución secular en la ciudad de Valencia en el año 1762². Al igual que otros consulados de esta época, éste va a configurarse como un organismo más complejo que el que nació en la Baja Edad Media, formado de tres cuerpos —cuerpo de comercio, junta de comercio y consulado— de los cuales únicamente el tercero tendría facultades jurisdiccionales. Éstas habrían de ejercerse “en las materias contenciosas de comercio, sean civiles, sean criminales, con tal que procedan del comercio y fábricas”, con conocimiento de las mismas tanto en primera como en segunda instancia³.

El tribunal se compondría de “tres Cónsules y un Juez de Apelaciones o alzadas, todos comerciantes, con dos Asesores abogados y un Escribano,

¹ Presentado como comunicación al congreso “Ciudad y mar en la Edad Moderna”, celebrado en Cartagena del 24 al 28 de septiembre de 1984, con el título de “La jurisdicción del tribunal del consulado de Valencia en el siglo XVIII”. Sus actas están en trance de publicación.

² El texto de la real cédula, de 15 de febrero, se puede consultar en el Archivo del Reino de Valencia (A.R.V. en adelante), Real Acuerdo, libro 57 (1762), fs. 15 y 15v.

³ *Reales cédulas de erección y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio que residen en la ciudad y reyno de Valencia, 1765*, impreso en 1766, Facultad de Derecho de Valencia, Derecho procesal.

para entender en todas las causas civiles de comercio marítimo y terrestre”⁴. Resurge así en Valencia esta institución tradicional, pero con grandes innovaciones introducidas por los Borbones; aparte de las de carácter orgánico, destaca, entre otras, la gran dependencia del poder real, el fuerte control que los monarcas del Setecientos intentaron ejercer sobre los cuerpos mercantiles, de lo que es buena prueba la presencia del intendente en el consulado⁵. Pese a ello, la jurisdicción del comercio, como había ocurrido tradicionalmente, continúa teniendo en el siglo XVIII vocación de jurisdicción especial, y con este rasgo vuelve a surgir también en el consulado valenciano. Es presumible, sin embargo, que la presencia de asesores jurídicos junto a los cónsules habría de limar diferencias en la práctica entre el proceso especial mercantil y la jurisdicción civil ordinaria⁶. Por último, en esta centuria el tribunal del consulado atenderá demandas interpuestas no sólo por comerciantes contra comerciantes, sino contra cualquiera que no sea mercader, aunque siempre “por causa de mercadería”⁷.

Conflictos de competencias.

La jurisdicción de los jueces mercantiles, en cualquier instancia, era sólo efectiva “en el lugar o territorio donde lo son, y no fuera dél... y así, no pueden conocer fuera de su territorio...”⁸. Esto, unido a la exclusividad de la materia que era objeto de la competencia de estos jueces, marcaba unos límites muy claros, entre los cuales se movía la jurisdicción mercantil. Pero tales limitaciones no resultaban siempre tan diáfanas para los hombres del siglo XVIII o quizá no querían darse cuenta de ellas. Esto sería motivo de conflictos entre el tribunal del consulado y otras instituciones con poderes jurisdiccionales, fenómeno muy frecuente en la España del antiguo régimen⁹.

⁴ Real cédula de 15 de febrero de 1762.

⁵ Capítulo I, ordenanza XVI, *Reales cédulas...*

⁶ E. Gacto así lo afirma en su *Historia de la jurisdicción mercantil en España*, Sevilla, 1971, pág.95.

⁷ Las ordenanzas del consulado de Valencia reformadas en 1777 declaran que “conviene al bien público” que cualquiera pueda “comerciar” aunque no esté matriculado, Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Consejo supremo de hacienda, leg. 365, *Reales cédulas de erección y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio que residen en la ciudad y reyno de Valencia*, impreso en 1777. También la doctrina sustenta un criterio amplio en cuanto a los sujetos que podían acudir ante la jurisdicción consular: ver, por ejemplo, J. de Hevia Bolaños, *Curia Filípica*, 2 vols., Madrid, 1725, II, f. 165.

⁸ J. de Hevia Bolaños, *Curia...*, II, pág. 164, núm. 7.

⁹ Ver las citas de P. Molas en *Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII*, Barcelona, 1977, págs. 263 y 293. La misma problemática en el consulado de Barcelona en J. Carrera Pujal, *Historia política y económica de Cataluña. Siglos XVI al XVIII*, 2 vols., Barcelona, 1947, II, págs. 588-611.

Ya en el documento de creación de los tres cuerpos de comercio —15 de febrero de 1762— Carlos III exime “enteramente a estos tres Cuerpos de la jurisdicción de la Audiencia y de otros cualesquiera Jueces y Tribunales, sujetándolos inmediatamente a la Junta General de Comercio, con inhibición de aquéllos”¹⁰. Esta orden no fue óbice para que los conflictos de competencias entre los jueces del consulado valenciano y otras instancias jurisdiccionales fueran frecuentes:

Por lo que respecta al oficio... mandado librar por el Corregidor y Justicia Mayor de la villa de Requena, relativo al conocimiento que pretende arrogarse sobre los vienes y efectos propios de Dn. Claudio Brunet existentes en aquélla, con inivición de este Rl. Tribunal, comprendemos que deve contestarse con nuevo oficio aziendo presente a dicho corregidor que los autos se allan pendientes en este Juzgado... por ser relativos al comercio y trato cuya privativa jurisdicción, según las Reales Ordenes, es propia...¹¹.

Dada la insistencia de las autoridades de Requena, el consulado se vio obligado a recurrir al Supremo Consejo de Castilla “a fin de que se decida la competencia”. La parte afectada por esta negativa a reconocer la jurisdicción consular pensaba que el corregidor trataba de “burlar y dexar sin efecto las providencias” del juez de comercio. En otra ocasión denunció que “el Corregidor de Requena sigue retrasando, con su postura, la marcha de los autos”. La Junta General de Comercio ordenó por ello al corregidor que “guardando la debida consecuencia con la inhivición a que se prestó en el principio de dicha causa, contribuya a su más breve expedición y sin nuevas demoras lleve a puntual efecto los despachos relativos a ella que le libre (el tribunal del consulado)”.

El motivo que aquí se vislumbra, por los términos utilizados, es el retrasar el proceso para ayudar a una de las partes del pleito¹². Pero aparte de esto, también el prestigio de cada institución estaría en juego en muchas ocasiones. La mayor parte de las veces las cuestiones surgirían entre la audiencia y el consulado, dos instituciones que, cada una en una esfera diferente, ejercían la justicia en nombre del rey¹³. En alguna ocasión el fiscal real hubo de pronunciarse en defensa de las competencias del consulado:

¹⁰ A.R.V., Real Acuerdo, libro 57 (1762), f. 134.

¹¹ Archivo Municipal de Valencia (A.M.V. en adelante), Tribunal de comercio, 1763, cajas 1 y 2.

¹² Lo mismo que en A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 17 (2), “Autos instados por Dn. Francisco Vellón” (1763); es una de las partes la que intenta demostrar la ausencia de competencia del tribunal consular en el asunto que se ventila; igualmente en 1763, caja 18 (1), “De Dn. Juan Bautista Gautier, comerciante de Marcella” (1763); caja 18 (2), “De Rosa Casanova, viuda de Dn. Jaime Fauré y otros” (1763).

¹³ Con relación al tribunal mercantil las ordenanzas de 1765 señalan que los tres cuerpos de

... Teniendo consideración a que dichos Autos se siguen entre Mercaderes y por hecho de Comercio, a lo prevenido en la Real Orden que se comunicó a esta Audiencia con fecha de 21 de abril de este año, y a lo que ha hecho presente el Cavallero Intendente, le parece que... si la Sala así lo estimare, *podrá... mandar* se passen originales al Consulado de esta Ciudad, a donde las partes ussen de su derecho como les convenga...¹⁴

Es de notar, sin embargo, que la intervención del fiscal no se hace en términos contundentes, sino usando un estilo de manifiesto respeto hacia la audiencia.

No es éste el único ejemplo. Otro pleito nos muestra una problemática semejante, haciéndose uso, de nuevo, del argumento de la rapidez del procedimiento mercantil frente al proceso ordinario, además de la existencia de una jurisdicción privativa en los tribunales mercantiles “dirigida a favor de la causa pública de comercio, a semejanza de lo que sucede en el estado eclesiástico, cuíos fueros no pueden renunciar los clérigos, tácita ni expresamente”¹⁵. Aquí el alcalde de lo civil se muestra bastante reticente en remitir al consulado unos autos que habían comenzado en la audiencia dos años antes del resurgimiento del tribunal consular, aunque no tiene más remedio que acabar cumpliendo la normativa.

De todos modos, estos problemas sobre los límites de las respectivas jurisdicciones no sólo afectaban a la materia procesal, sino a otros asuntos que caían bajo la competencia de los diferentes cuerpos de comercio, hasta el punto de llegar a obligar al rey a tomar cartas en el asunto, lo que pareció alterar bastante su paciencia. Los términos que empleó intentando poner punto final a las diversas polémicas así lo muestran:

... Havía mandado su Magestad se previniese a esta Audiencia que no bolviese a mezclarse en negocios tocantes a la privativa jurisdicción de comercio, ni busque de propósito a este fin la qualidad de Corregidor que recide en el Intendente para executar su superioridad¹⁶.

... Se participa la Resolución de su Magestad de que se inhiva y abstenga esta Audiencia de tomar conocimiento en los asuntos de

comercio están sujetos “inmediatamente a mi Junta General de Comercio y Moneda”, *Reales cédulas*...

¹⁴ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 18 (2), “De Rosa Casanova...”. El subrayado es del texto.

¹⁵ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 19 (1), “Autos a pedimento de Juan Bautista Gautier” (1760).

¹⁶ A.R.V., Real Acuerdo, 1764, f. 84v.

comercio, haciendo que también lo executen los demás juzgados subalternos, y que separen al Consulado todos los pleytos y causas que en materias de comercio se hallassen pendientes en esta Audiencia y sus tribunales, sin respeto a los tiempos en que se haian principiado ni dar lugar en lo sucesivo a recursos y competencias que, sobre no poderse formar entre jurisdicciones privativas, *desagradan mucho a su Magestad* por ser perjudiciales a su real servicio y a la causa pública¹⁷.

Las expresiones que se cruzan entre los implicados en estos conflictos son a veces bastante duras; así, la junta del consulado de Valencia expone a la Junta General que a la audiencia, “no quedándole qué hazer... para oprimirlo y abatirlo (al consulado), acaba de dar la última Prueba del odio que tiene a estos tribunales”¹⁸.

P. Molas sistematiza los problemas sobre competencias en Valencia; éstos serían planteados por la colonia mercantil francesa, por la audiencia y por los comerciantes de Alicante. La oposición de la audiencia correspondía a la tendencia general que enfrentaba a la jurisdicción del Consejo de Castilla, audiencias y corregidores con la jurisdicción de hacienda y comercio integrada por la Junta General, los intendentes y las juntas particulares¹⁹.

Resumiendo, los planteamientos de cuestiones de competencias obedecen en ocasiones a un deseo de los litigantes de alargar de alguna forma el proceso mercantil que, en teoría, debía ser un proceso corto. Otras veces lo que juega en estas cuestiones es el prestigio de determinadas instituciones²⁰. Pero también parece vislumbrarse una pugna entre representantes de intereses diversos: los mercantiles, y los de la nobleza togada. No hay que olvidar que la audiencia, además de funciones judiciales, estaba dotada de facultades de gobierno. Para tan alto organismo, ver cómo se le arrebatava una parte de su jurisdicción debía ser un duro trago. Además, la composición de la audiencia y del consulado era muy diferente. La cualificación de los que se veían afectados e integraban los tres cuerpos de comercio valencianos se efectuó a través de la real cédula de erección de los mismos: se trataba de

¹⁷ El subrayado es mío. A.R.V., Real Acuerdo, 1764, fs. 93-95v.

¹⁸ A.R.V., Real Acuerdo, 1771, f.636v. Otros ejemplos: 1773, f. 510; 1776, fs. 40v-50v.; A.G.S., Consejo supremo de hacienda, leg. 264, núm. 7, “Expediente de Dn. Pedro Sevilla y Siurana”: aquí el problema se plantea por la intervención del Consejo de Guerra.

¹⁹ P. Molas, *Comerç i estructura...*, págs. 320-322.

²⁰ R. Franch Benavent, *La burguesía comercial valenciana en el siglo XVIII*, tesis doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, curso 1984-85, págs. 266 y ss. Una parte de la misma ha sido publicada bajo el título *Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII*. Para las citas de este trabajo utilizaré la tesis doctoral por ser más completa.

comerciantes ejerciendo “el Comercio en Tienda abierta” y con “caudal con que poderlo practicar”. Aunque la junta de comercio de Valencia contaba entre sus miembros con dos “caballeros”, no bastaba con su pertenencia a la nobleza, sino que se exigía que fueran “Hacendados y cosecheros”, y por lo tanto, interesados en el “bien común” y en el “fomento de la Agricultura, *facilitando la venta y salida de sus frutos*”²¹.

Otros motivos parecen estar presentes en estos problemas de competencias. Los cónsules quedaban revestidos de funciones jurisdiccionales que habían sido desgajadas de las de la audiencia; se enfrentaban así los intereses de unos jueces técnicos frente a otros que no lo eran —lo que no significaba que no fueran peritos en materia de comercio— y que pese a ello se inmiscuían en lo que hasta 1762 había sido su terreno. Es realmente ilustrativa la siguiente cita, muestra del desprecio que las personas cuyos intereses giraban en torno a las instituciones mercantiles provocaban en los componentes de la audiencia; se trataba, según ésta, de

... individuos nada péritos en el arte de comerciar, pues a excepción de muy pocos, ninguno de los demás tiene práctica en las materias de comercio de mar, ni tampoco de sus contratos, porque los principios de su educación han sido longistas en especiería, velluteros, o fabricantes de ropa de seda, torcedores, pasamaneros, escribanos, procuradores y de otras semejantes profesiones...²².

Por otra parte, además de estas razones “profesionales” es posible que los intereses de clase estuvieran también presentes. R. Franch estima que los promotores de la creación de los cuerpos de comercio de Valencia fueron, sobre todo, comerciantes sederos “muchos de los cuales tenían unos orígenes gremiales tan recientes que sólo forzando mucho las cosas se les podía considerar como miembros de la profesión comercial”. El hecho de que las autoridades locales hubieran quedado postergadas en el proceso de creación de las nuevas instituciones les habría acarreado la oposición con que fueron acogidas por algunas capas sociales del antiguo Reino: los mercaderes franceses establecidos en Valencia, el comercio de Alicante y la propia audiencia²³. Siguiendo con los conflictos planteados por esta última frente al consulado, creo que pueden vislumbrarse motivos más profundos que el solo hecho de haber sido relegada al plantearse la creación de los cuerpos de comercio. Éste serviría tal vez de excusa, pero es evidente que la creación de las nuevas instituciones habría de servir al desarrollo de unas capas de la

²¹ El subrayado es mío.

²² Citado por R. Franch Benavent, *La burguesía comercial...*, pág. 267.

²³ R. Franch Benavent, *La burguesía comercial...*, pág. 266.

sociedad cuyos intereses eran muy diferentes de los que podían guiar a la “nobleza togada” que formaba parte de la audiencia ²⁴.

La legislación invocada en los procesos mercantiles.

La normativa aplicable, tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, es muy amplia y bastante dispersa. El tribunal de comercio restaurado en 1762 será una institución que no podrá sustraerse a la tónica general del ordenamiento jurídico de la época. En este renacimiento tardío necesitará normas de nueva creación, pero se acudirá a otras procedentes de tiempos pretéritos; todo ello formará un entramado jurídico bastante complicado, que arrastra tras de sí normas muy antiguas unidas a otras más modernas. Veámoslo con un poco de detalle:

— Real cédula de creación de los tres cuerpos de comercio, de 15 de febrero de 1762. Hasta la formación de nuevas ordenanzas, éstos se regirían “por las antiguas..., en la parte que no estén expresamente derogadas”.

— “Reales cédulas de erección y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio que residen en la ciudad y Reino de Valencia” (7 de mayo de 1765): son las que se redactaron para su funcionamiento por la “Junta Particular de Gobierno” de Valencia, según el mandato recibido en la real cédula de 1762 ²⁵. A pesar de su exigencia de que se confeccionaran las ordenanzas en un plazo de seis meses, se tardó tres años en su elaboración. El capítulo X de dichas ordenanzas reflejaba que la facultad legislativa le correspondía a la junta particular:

Si en algún tiempo conviene mudar, o añadir, o suplir alguna de las presentes Ordenanzas, doy facultad a la Junta Particular, para que, tratada con toda reflexión y madurez la materia, represente por medio de mi Junta General de Comercio con toda claridad, y expresión la novedad, que tenga por conveniente hacer con las

²⁴ P. Molas afirma que en la segunda mitad del siglo XVII, en la audiencia de Cataluña numerosos juristas distinguidos se ennoblecían. La aristocratización de las audiencias setecentistas ya era perceptible también en la audiencia de Valencia. Igualmente, los magistrados valencianos solían pertenecer a una pequeña nobleza togada fuertemente interrelacionada. Ver autor citado, “La chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico”, “Las audiencias borbónicas en la Corona de Aragón”, pág. 120, y “Militares y togados en la Valencia borbónica”, pág. 180, todos estos trabajos publicados en la *Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, 1980. Es también interesante el de M. A. Pérez Samper, “La formación de la nueva audiencia de Cataluña (1715-1718)”, en *Historia social...*, especialmente la pág. 198. Desde el punto de vista procesal, en algún caso, el traslado de los autos de otro tribunal al de comercio respetaba las actuaciones ya celebradas y continuaba la causa en el punto donde el otro órgano jurisdiccional se había quedado, A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 1, “Autos instados por Dn. Antonio Laberontt” (1761), f. 98; 1763, caja 18 (2), “Doña Rosa Casanova. Sobre recprobro”, f. 278v.

²⁵ Real cédula de 15 de febrero de 1762.

razones, y motivos, que haya para ello, a fin de que instruida de todo, determine lo que más convenga...²⁶.

— “Reales cédulas de erección y ordenanzas de los tres cuerpos de comercio, que residen en la ciudad y Reino de Valencia” dadas para erigir la diputación de Alicante como apéndice de la institución mercantil valenciana (11 de julio de 1777)²⁷.

— Existe además una larga serie de disposiciones aisladas —reales cédulas, reales decretos, reales órdenes...— que fueron promulgadas a lo largo del siglo XVIII, concedidas unas por la corona, otras emanadas de la junta particular²⁸, o bien dictadas por el propio tribunal de comercio bajo la forma de ordenanzas²⁹.

— Junto a toda esta producción legislativa del Setecientos no faltan referencias a normas de épocas anteriores: ley de Toledo³⁰, ley de Madrid³¹, las Partidas, la práctica del antiguo consulado de mar valenciano³². En esta enumeración, la legislación aplicada por el consulado tiene ya una buena parte de leyes de origen castellano, motivada por la desaparición del derecho valenciano —tanto el público como el privado— en 1707. Esto explica también la referencia a algunos capítulos de las ordenanzas de los consulados de Bilbao y de Burgos, citados expresamente como legislación aplicable en el tribunal de comercio de Valencia³³.

²⁶ *Reales cédulas de erección...*, de 1765.

²⁷ A.G.S., Consejo supremo de hacienda, leg. 365; también en A.R.V., Real Acuerdo, 1777, fs. 923-952v.

²⁸ Ver cédula real de 1762. También en A.G.S., Consejo supremo de hacienda, leg. 364, Ordenanzas del comercio de Valencia, núms. 5 y 6.

²⁹ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 17 (1), “Dn. Jayme Vabre contra Dn. Pedro Peyrouton”, f. 76.

³⁰ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 2, “Concurso. Luis Fita, procurador, en nombre de Dn. Claudio Josef Brunet” (1793), fs. 916 y 925v.

³¹ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 18 (2), “Dona Rosa Casanova y otros contra Dn. Josef Bordalonga”, f. 48lv. Estas dos últimas leyes citadas deben ser la de Toledo de 1525 —dada por don Carlos y doña Juana— y la de Madrid de 1552 de Felipe II; siempre son citadas en los pleitos del consulado en relación con las fianzas, y dado que la legislación recopilada sobre fianzas en general no coincide con tales citas, la alusión a ambas leyes debe referirse a las “fianzas que han de dar los Asistentes y Corregidores para ser recibidos en sus oficios”, donde se les fija un plazo para prestarlas de treinta días después de ser recibidos: *Nueva Recopilación*, libro III, tít. V, ley 13 y auto 12; *Novísima Recopilación*, libro VII, tít. XI, ley 7.

³² *Reales cédulas de erección...*, de 1765, ordenanza II, cap. VII: “Deberá tener en la Marina un respuesto de Cables, Áncoras y demás pertrechos para socorrer las Embarcaciones que entraren o estuvieren en la Playa en caso de borrasca u otras urgencias, y las partes interesadas satisfarán el costo y gasto que causaren: todo en la conformidad que lo practicaba el antiguo Consulado de Mar”.

³³ “Real orden de 9 de agosto de 1773 por la qual se mandan observar ciertos capítulos de las Ordenanzas de Burgos y de Vilbao”, *Novísima...*, libro IX, tít. II, nota 1.

— El derecho de otros puntos comerciales del litoral mediterráneo aporta también algunos elementos al derecho mercantil valenciano del XVIII³⁴. Esta influencia parece, sin embargo, menos profunda en esta centuria de lo que debió serlo durante el período bajomedieval. Así, en un proceso consular se afirma que “no sabemos los estilos de allá (Marsella)”³⁵. Existe, por lo tanto, una evolución que haría que ese derecho mercantil surgido dentro del área mediterránea fuera configurando determinados rasgos característicos y ciertas especialidades que harían que las distintas plazas comerciales de este núcleo geográfico se individualizaran unas frente a otras. Ya en la Baja Edad Media se dieron algunas diferencias en el Derecho que iba surgiendo en ellas; sumando a esto el transcurso del tiempo, la actividad legislativa de cada consulado, la intervención de los reyes, el comercio con otras áreas —con la del norte de Europa ya en los tiempos bajomedievales o con las Indias desde la Edad Moderna— junto a otras influencias, el resultado no podía ser más que una separación cada vez más profunda que llevaría a la ignorancia del Derecho vigente en otros lugares fuera de Valencia. Además de los factores citados, interviene el derecho común, acogido en diferentes grados en los variados ordenamientos mercantiles³⁶.

Otra característica, pues, del derecho que será invocado ante este tribunal es la intervención que otros factores ajenos al mundo del comercio tienen en su creación. R. Franch apunta la hipótesis de que en los inicios del siglo XIX existió un encargo y un proyecto de redacción de unas “ordenanzas consulares de mar”, lo que significaría la puesta en vigor de un cuerpo ordenado conteniendo la legislación mercantil para Valencia. Parece que el intento

³⁴ Referencia expresa a una posible costumbre de Vinaròs: “...es corriente y público en Vinaròs admitirse a los Patrones de Barcos todos los gastos de su mantenimiento...”, en A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 17 (1), “Autos instados por Dn. Antonio Laberontt, de Vinaroz, contra Dn. Antonio Forner, comerciantes” (1761), f. 103.

³⁵ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 17 (1), “Autos instados por Dn. Antonio Laberontt...”, f. 177.

³⁶ Es visible esta influencia a lo largo de diversos procesos celebrados ante el tribunal de comercio: A.M.V., Tribunal de comercio, 1762, caja 1, “Dn. Pedro Florensa, comerciante, de las ciudad de Zaragoza, contra Dn. Pedro Peyrouton, también comerciante de esta ciudad, sobre cuentas de trigos” (1762): hay una “renuncia a la excepción de la cosa no habida ni recibida y demás del caso”; renuncia al fuero “de su domicilio, a la ley *Si convenerit de Jurisdictione omnium iudicum* y otras”; 1762, caja 2, “De Juan Angel Capriata contra Agustín Vila y compañía”, otras renunciaciones semejantes, y se implora “si fuere necesario, el beneficio de la restitución *in integrum ex capite iuxta ignorantia*, o la general *Si aliquem iuxta causa*, o cualquier omisión...”, f. 43; 1763, caja 17 (2), “Autos executivos instados por Dn. Francisco Vellón contra Dn. Juan Bautista Albertos” (1763). No se trata de una cita exhaustiva, sino a título de ejemplo. En otros casos se habla de “equidad” como uno de los principios que deben informar el derecho mercantil, y explícitamente lo expone J. de Hevia Bolaños, *Curia...*, II, f. 171: la confesión extrajudicial en favor del ausente hace “plena probanza” en el tribunal de comercio “por ser de equidad y de equidad canónica”.

fracasó, lo que impide arriesgar suposiciones en torno al mismo y al papel que hubiera desempeñado dentro de esta rama del ordenamiento jurídico³⁷.

— Para finalizar este apartado, cabe recoger las alusiones que aparecen en las alegaciones de los procesos a la “Ley del Reyno” o a las “Leyes de estos Reynos”³⁸. A falta de referencias más explícitas, es difícil saber a qué se alude exactamente. Teniendo en cuenta que en una de estas citas se habla de las “Leyes del Reyno y Autos acordados”³⁹, parece tratarse en todos los casos de una alusión genérica a toda la legislación aplicable, incluida la recopilada —que desde 1723, formalmente, distingue entre la colección de leyes recopiladas (legislación real y de las cortes) y los autos acordados (legislación de los consejos)—, sin querer designar ninguna norma concreta⁴⁰.

Dos conclusiones me interesa destacar en este trabajo, que no es más que un eslabón dentro de una visión más amplia en la que trabajo sobre el proceso mercantil valenciano de finales del antiguo régimen. En primer lugar, que la jurisdicción de comercio no es autónoma, ya que la alegación de normas en los procesos no se limita a las leyes o costumbres generadas exclusivamente para el tráfico mercantil dentro de las instituciones o de los grupos sociales de mercaderes. De esta conclusión surge la segunda: en esta limitación tiene un gran peso la influencia o la mediatización ejercida por el poder del monarca, no sólo a través de la utilización de la legislación real, sino por la presencia de su representante —el intendente— en la celebración de los juicios⁴¹.

³⁷ En todo caso, su título, “Ordenanzas de mar”, pone de manifiesto que su contenido sería parcial, es decir, dedicadas a derecho marítimo. Ver R. Franch Benavent, *La burguesía comercial...*, pág. 290.

³⁸ A.M.V., Tribunal de comercio, 1763, caja 18 (2), “Doña Rosa Casanova y otros contra Dn. Josef Bordalonga”, f. 316; cajas 1 y 2, “Concurso. Luis Fita, procurador, en nombre de Dn. Claudio Josef Brunet”, f. 832v.; A.R.V., Real Acuerdo, 1773, f. 513.

³⁹ A.R.V., Real Acuerdo, 1773, f. 513.

⁴⁰ La real cédula de 29 de noviembre de 1785 de erección del consulado de La Coruña es algo más explícita que la legislación de la institución valenciana: “XLIV. Para la decisión de los negocios que ocurran se arreglará el Consulado a lo prevenido en las leyes de Castilla e Indias y ordenanzas de la materia, especialmente la del Consulado de Bilbao...”. Ver E. Larruga, *Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España*, Madrid, 1787-1796, 44 vols. XLIV, pág. 202. Esta norma recoge posiblemente la práctica normal de los consulados castellanos; como en Valencia se aplicaba ya el derecho de la Corona de Castilla, hay que pensar que no habría grandes diferencias en la actuación de su tribunal de comercio, aparte de la vigencia que de una forma u otra pudiera seguir teniendo el derecho tradicional del área mediterránea.

⁴¹ Ver, por ejemplo, A.M.V., tribunal de comercio, año 1764 en general.